



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

ABRIL 2022

No tan sólo turbulencias

El gobierno no tan sólo ha debido enfrentar “turbulencias” en su proceso de instalación. También dificultades políticas a la hora de ordenar a sus dos coaliciones, como quedara demostrado en la votación del quinto retiro y la fórmula alternativa propuesta por el gobierno. Y es más que evidente que el gobierno ha tenido dificultades para desplegar una agenda de corto plazo para enfrentar los temas más relevantes de la contingencia, al punto que muchos especulan con una cierta “sequía legislativa”. Son varias las encuestas que registran un brusco descenso en la aprobación del gobierno. Algunas muestran una desaprobación de más de un 50% a la figura del presidente. Sin dudas es una mala noticia este brusco descenso a tan sólo cuarenta días de asumir el poder.

En alguna medida, ello pudiera atribuirse a las llamadas turbulencias, a las que se ha referido el presidente. Pero es evidente que concurren otro tipo de razones. El fenómeno inflacionario y las bajas proyecciones de crecimiento, contribuyen a explicar este fenómeno. A ello se suma el controvertido proceso constituyente., que divide fuertemente las opiniones

Pese a todo, el gobierno logró frenar un nuevo retiro, evitando las nefastas consecuencias económicas advertidas por el ministro de hacienda. Sin embargo, el incidente plantea complejos desafíos para el ejecutivo hacia el futuro. Tanto en el plano económico, como político y social

Tras el rechazo del cuarto y quinto retiro, parece haber llegado la hora de dejar atrás esos debates para concentrarse en los temas que verdaderamente les importa a las personas. El gobierno ha reconocido la necesidad de adelantar el cronograma para la reforma integral del sistema previsional y una reforma tributaria que permita financiar el ambicioso programa de gobierno ofrecido al país.

Pero aquello requiere ser complementado con una agenda de corto plazo que se haga cargo de los problemas más urgentes que enfrenta el país, como las listas de espera en salud, la brecha de conocimientos de los estudiantes, generada por la pandemia, la naturalización de la violencia y el avance del crimen organizado, la crisis migratoria o la situación en la Araucanía.

Y tan importante como lo anterior, como enfrentar el proceso inflacionario y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. No es una tarea fácil. La inflación es un fenómeno global, en buena medida explicado por la pandemia y agravada por la guerra en Ucrania, con un fuerte impacto en el precio de los alimentos y combustibles. Las economías desarrolladas registran cifras históricas de alta inflación y el fenómeno se reproduce en la región y nuestro propio país.

Nada es más corrosivo para el gobierno que una inflación descontrolada y modestas proyecciones de crecimiento. Todos los días los medios de comunicación se preocupan de destacar el fuerte incremento de los precios de los alimentos y otros productos esenciales. Y es más que evidente que el fenómeno golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

Es más que urgente desplegar una iniciativa en apoyo de estos sectores, que eviten propuestas populistas como fijación de precios o rebaja del IVA de la canasta básica y más bien apunten a transferencias directas a los sectores más necesitados.

El ministro de hacienda, Mario Marcel ha demostrado mayor pro actividad a la hora de desplegar una agenda de corto plazo, que incluye un reajuste parcializado- en los meses de mayo y agosto- para llevar el salario mínimo a \$400.000, como era la promesa del gobierno (con acuerdo con la CUT). A la par que ha anunciado un subsidio para los trabajadores, que permita paliar la inflación. Junto con lo anterior, ha iniciado diálogos tripartitos para discutir la reforma tributaria, que se espera presentar en el segundo semestre de este año.

En paralelo, la ministra del trabajo ha desplegado una iniciativa similar para debatir la reforma del sistema previsional, a la que el gobierno ha asignado mayor urgencia.

El reciente cónclave organizado por el gobierno con su comité político y los jefes de los partidos oficialistas, parecen marcar un giro para poner en el centro de las preocupaciones del gabinete los problemas más acuciantes de la gente, que deberá ser compatibilizado con las reformas estructurales planteadas en el programa de gobierno.

El ministro secretario general de la presidencia debe dar a conocer en los próximos días una clara y robusta agenda legislativa, de corto, mediano y largo plazo, que permita responder a las urgencias ciudadanas y asumir el programa de reformas que ha planteado el gobierno.

Convertir la mayoría electoral en una mayoría política

En el terreno propiamente político, el principal problema que enfrenta el gobierno es como convertir la mayoría electoral alcanzada en la segunda vuelta en una mayoría social y política comprometida con el proceso de cambios y transformaciones prometidas al país.

La idea de converger en una sola coalición no parece viable en el corto plazo. Básicamente, por las diferencias y desconfianzas mutuas que aún subsisten. Tanto el gobierno, como las propias directivas partidarias y sus bancadas parlamentarias, deberán esforzarse para superar esas diferencias y generar las confianzas necesarias, que posibiliten la convergencia de estas fuerzas en una gran coalición, con las fronteras lo más amplias posibles, comprometidas con el programa de transformaciones.

Es claro que la suma de ambas coaliciones que apoyan al gobierno no constituye mayoría política o parlamentaria, y deben buscar sumar a otros sectores que han mostrado su voluntad de colaborar, aún sin ser parte del mismo.

Son varios los partidos, incluso del propio oficialismo, que acusan desprolijidad en el trabajo pre legislativo y malos tratos al equipo político del gobierno. Resulta indispensable ajustar el diseño del gobierno en su relación no tan sólo con los partidos del oficialismo y sus bancadas parlamentarias, sino con todos aquellos sectores susceptibles de sumar al proceso de cambios y transformaciones. En la forma y en el fondo.

La suerte del proceso constituyente

Son muchos los que sostienen que la suerte del proceso constituyente ya está jugada. En menos de dos semanas, el pleno de la convención deberá despachar las propuestas de las comisiones y preparar el borrador de una nueva constitución que deberá ser sometida al llamado proceso de armonización, con atribuciones, hasta ahora limitadas, además de un preámbulo, fijando el itinerario de implementación de la nueva institucionalidad. Un proceso que no ha estado exento de controversias y críticas cruzadas y en donde las encuestas muestran que se fortalece la opción por el rechazo.

El reciente acto organizado por una multigremial, de dudosa representatividad, en conjunto con el movimiento autodenominado “amarillos”, pasó de una visión crítica del proceso constituyente, para transformarse en un verdadero comando por el rechazo. A ello debe sumarse la visión crítica de diversos sectores, como la DC, el PRSD y otros, que podrían sumarse al rechazo del proceso constituyente.

A ello se suman las voces de diversos sectores del oficialismo y cercanos al gobierno, que han planteado dudas y diferencias con el avance del proceso constituyente. Entre

ellos el senador socialista, Fidel Espinoza. Afirmando que hoy no estaba por aprobar la propuesta de nueva constitución.

El proceso constituyente podría fracasar no tan sólo porque la convención no logre llegara a acuerdos sobre un texto que ofrecer al país, o porque se imponga el rechazo al apruebo. También porque la propuesta se imponga por una mayoría tan estrecha que el reste legitimidad.

El rechazo no es la muerte, como ha afirmado e ex presidente Lagos, pero expondría al país a un largo proceso de inestabilidad institucional y graves tensiones sociales y políticas. Sería muy complejo construir un nuevo consenso institucional en un parlamento marcado por la disgregación política y en donde la derecha tendría el derecho a veto que le concede su empate en el senado.

Una tercera vía (devolver al parlamento la facultad constituyente, reflatar el proyecto de nueva constitución elaborado durante el gobierno de Michelle Bachelet o convocar a una nueva convención constituyente), es del todo inviable y mas bien parece ser una pieza de la campaña por el rechazo.

La mejor opción que tiene el país es aprobar la propuesta de nueva constitución que presente la convención, incluida las reformas de los quórumos necesarios para futuras modificaciones de la nueva constitución, que no establecen los quórumos supra mayoritarios establecidos en la actual carta fundamental.

El principal desafío que hoy enfrenta no tan sólo la convención constituyente, sino todos aquellos sectores que contribuyeron a construir una salida política e institucional al estallido social (incluyendo al gobierno, organizaciones sociales y partidos progresistas), es trabajar por el éxito del proceso constituyente y una masiva aprobación en el plebiscito ratificatorio del próximo cuatro de septiembre.

Ello exige un ejercicio de responsabilidad política y realismo no tan sólo de parte de los propios convencionales para recoger críticas fundadas y construir una propuesta que pueda ser respaldada por una amplia mayoría nacional. También de los diversos sectores políticos (incluyendo a la derecha), que debe medir las consecuencias que tendría el fracaso del proceso constituyente para la estabilidad y paz social en el país. Tal como lo afirmara el dirigente político español, Íñigo Errejón, la nueva constitución no tan sólo puede aspirar a representar a la izquierda o el progresismo, sino a una amplia mayoría del país.

Estas dos próximas semanas y aquellas que resten para culminar el proceso pueden ser cruciales. Aún es tiempo para afinar y armonizar una propuesta que aspire a reunir consensos amplios, No fue una buena señal la verdadera funa al colectivo socialista para negar acuerdos sobre algunas propuestas sometidas a la consideración del pleno. Especialmente aquellos convencionales que se identifican con el actual gobierno tienen la responsabilidad de extremar los esfuerzos para superar sus diferencias y lograr consensos lo más amplios posibles.

El plebiscito ratificatorio corre el riesgo de transformar en un factor de polarización política, que no tan sólo divida al país entre izquierda y derecha, sino plantee nuevos realineamientos políticos que tan sólo pueden debilitar al bloque en el poder.

La suerte del gobierno y los partidos que lo apoyan, está indisolublemente vinculada al éxito del proceso constituyente. En este sentido, el gobierno no puede ser neutral. Tiene el legítimo derecho a expresar sus opiniones, tal como lo ha hecho el presidente y algunos de sus ministros. No tan sólo para apoyar el proceso sino también para trabajar porque este se transforme en un lugar de encuentro de una amplia mayoría nacional.

Todo aquello independiente de su deber de garantizar un plebiscito limpio y transparente, con plenas garantías para todos los sectores. Y, desde luego, no usar recursos públicos en favor de su opción. Por legítima que sea.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)